

**Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 6/2006, de 2 de febrero, por el que se establecen las tarifas de precios públicos por la prestación de servicios en los Centros Infantiles (0-3 años) dependientes de la Junta de Castilla y León.**

La contraprestación por los servicios que prestan los centros infantiles dependientes de la Junta de Castilla y León tiene la consideración de precio público. Las tarifas aplicables actualmente por la prestación de estos servicios en la administración autonómica se regulan en el Decreto 6/2006, de 2 de febrero, por el que se establecen las tarifas de precios públicos por la prestación de servicios en los Centros Infantiles (0-3 años) dependientes de la Junta de Castilla y León.

En el momento actual se hace precisa la modificación del citado decreto con la finalidad de implantar la gratuidad para el tercer curso del primer ciclo de educación infantil. No obstante, dicha gratuidad para el tercer curso del primer ciclo de educación infantil alcanzaría tan sólo a los servicios educativos, por lo que se introduce un precio específico para el servicio complementario de comedor escolar en este tercer curso. Además, mediante esta modificación se actualiza el concepto de unidad familiar, así como el sistema para la determinación de la renta de la unidad familiar, se concretan las exenciones y bonificaciones, que se extienden además a los servicios complementarios de comedor escolar y pequeños madrugadores y se abordan las consecuencias del impago del precio por los usuarios del servicio.

La presente modificación de decreto se adecúa a los principios de buena regulación. En su elaboración se han observado los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia exigidos por el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los de coherencia, accesibilidad y responsabilidad, que añade en su artículo 42 la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública.

En atención a los principios de necesidad y eficacia, la presente modificación de decreto se ha elaborado por una razón de interés general, adecuar la regulación de los precios públicos por la prestación de servicios en el primer ciclo de educación infantil en las escuelas

infantiles de titularidad de la Administración de la Comunidad de Castilla y León al mandato de la Ley Orgánica 3/2020 de 29, de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, universalizando la gratuidad en el último curso del primer ciclo de educación infantil en el próximo curso 2022-2023.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, esta modificación contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad que el interés público requiere. Se ha optado por la modificación del decreto ya vigente debido a que, a pesar de las novedades introducidas, una mera modificación del texto es instrumento suficiente para contenerlas en su totalidad.

Para garantizar el principio de seguridad jurídica y de coherencia, esta modificación de decreto se integra en un marco normativo coherente con el resto del ordenamiento jurídico, adecuándose a la planificación educativa en desarrollo de la normativa básica estatal, siguiendo, en especial, lo establecido en la ya mencionada disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, donde se hace referencia, en relación con el primer ciclo de educación infantil, al avance hacia una oferta pública suficiente y asequible con equidad y calidad y garantice su carácter educativo, indicando además que en su progresiva implantación se tenderá a la extensión de su gratuidad, priorizando el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social y la situación de baja tasa de escolarización.

En relación con el principio de eficiencia ha de ponerse de manifiesto que la aprobación de esta modificación de decreto no impone nuevas cargas administrativas y su aplicación supondrá una correcta racionalización de la gestión de los recursos públicos.

Asimismo, se garantiza tanto el principio de accesibilidad a través de una redacción clara y comprensible de la norma, en la que se ha tenido en cuenta las directrices de técnica normativa que se contienen en la Resolución de 20 de octubre de 2014, del Secretario General de la consejería de Presidencia, por la que se aprueban las instrucciones para la elaboración de los documentos que se tramitan ante los órganos colegiados de Gobierno de la Comunidad de Castilla y León, como el principio de responsabilidad que supone la determinación de los órganos responsables del procedimiento incluido en la norma.

El principio de transparencia se ha cumplido en la tramitación del decreto a través del Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 en relación con el artículo 75 de la Ley 3/2001, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, así como del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto de los trámites de consulta pública previa y de audiencia e información pública, y del artículo 16 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, respecto del trámite de participación ciudadana.

Este decreto ha sido dado a conocer a la Comisión Delegada del Gobierno, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1.c) y g) del Decreto 19/2022, de 26 de mayo, por el que se crea y regula la Comisión Delegada del Gobierno.

Asimismo, se ha recabado dictamen del Consejo Escolar de Castilla y León de conformidad con el artículo 8.1.a) de la Ley 3/1999, de 17 de marzo, del Consejo Escolar de Castilla y León.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Educación, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de de 2022

## **DISPONE**

**Artículo Único.** *Modificación del Decreto 6/2006, de 2 de febrero, por el que se establecen las tarifas de precios públicos por la prestación de servicios en los centros infantiles (0-3 años) dependientes de la Junta de Castilla y León.*

Uno. Se modifica el artículo 2, quedando como sigue:

**«Artículo 2. – Unidad familiar.**

1. A los efectos de este decreto serán miembros computables de la unidad familiar el padre y la madre o el tutor, el propio alumno, los hermanos solteros menores de veinticinco años que convivan en el domicilio familiar o los de mayor edad cuando se trate de personas con discapacidad, así como los ascendientes de los padres que residan en el domicilio familiar.

En el caso de divorcio o separación legal de los padres no se considerará miembro computable aquél de ellos que no conviva con el alumno. Tendrá, no obstante, la consideración de miembro computable, en su caso, el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación cuya renta se incluirá dentro del cómputo familiar.

En el caso de divorcio o separación legal de los padres, cuando exista custodia compartida, serán miembros computables de la unidad familiar las personas mencionadas en el párrafo primero de este apartado, pero no los nuevos cónyuges o personas unidas por análoga relación del padre o la madre.

2. La situación familiar a efectos de la determinación de la renta per cápita de la unidad familiar que se tendrá en cuenta para establecer el precio público que debe abonarse se referirá a la fecha de 31 de diciembre del año anterior al del inicio del curso escolar.»

Dos. Se modifica el artículo 3, quedando como sigue:

**«Artículo 3. – Renta per cápita mensual de la unidad familiar.**

1. La renta de la unidad familiar se obtendrá por agregación de la rentas del ejercicio anterior al del inicio del curso escolar de cada uno de los miembros computables de la unidad familiar, proporcionadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y calculadas de acuerdo con la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la forma siguiente:

- a) Para unidades familiares o miembros computables que hayan presentado declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, se sumará la base imponible general con la base imponible del ahorro, excluyendo todos los saldos netos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales de los cuatro ejercicios anteriores al del inicio del curso escolar, así como el saldo neto negativo de rendimientos de capital mobiliario de los cuatro ejercicios anteriores a dicho ejercicio. A este resultado se restará la cuota resultante de la autoliquidación.
- b) En el caso de unidades familiares o miembros de unidades familiares computables que obtengan ingresos propios o no hayan presentado declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se procederá de forma equivalente a lo indicado en la letra a), y a las imputaciones íntegras se les restarán los gastos y deducciones del trabajo.

La renta así obtenida se dividirá entre el número de miembros computables de la unidad familiar y el resultado obtenido se dividirá a su vez entre 14 mensualidades.

2. Los datos se verificarán de forma directa o por medios electrónicos cuando así se haya autorizado por los interesados en los correspondientes formularios de tramitación del procedimiento. En caso contrario, se acreditará mediante la aportación de certificado de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de cada solicitante y certificado de empadronamiento para acreditar la convivencia.»

Tres. Se modifica el artículo 4, quedando como sigue:

**«Artículo 4. – Exenciones y bonificaciones.**

1. Estarán exentos del pago del precio público referido en el artículo 1 las personas que se encuentren en las siguientes circunstancias:

- a) Los menores con circunstancias socio familiares que les ocasionen un grave riesgo. A estos efectos se consideran circunstancias de grave riesgo o asimiladas a las mismas:

- 1º. Aquellas que originen la adopción de medidas protectoras de tutela o guarda del menor, conforme a lo establecido en la Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Dicha circunstancia será acreditada mediante la exhibición de la resolución judicial o administrativa correspondiente, aportando copia de la misma.
  - 2º. Aquellas que originen carencias o dificultades en la atención a las necesidades básicas que los niños y niñas precisan y que supongan dificultades para atenderles adecuadamente, no requiriendo en principio la separación del medio familiar. Esta circunstancia se acreditará mediante valoración social efectuada por la consejería competente en materia de detección, investigación, valoración, intervención y seguimiento de los casos relativos a menores en situación de riesgo, aportando copia de la misma.
  - 3º. La de los menores tutelados o cuya guarda haya sido asumida por la Junta de Castilla y León. Esta circunstancia se acreditará documentalmente mediante la exhibición de la resolución judicial o certificado de la comisión de tutela, aportando copia de ellos.
- b) Los menores pertenecientes a familias numerosas de categoría especial. La consideración de familia numerosa será verificada por la Administración de forma directa o por medios electrónicos, salvo oposición expresa, en cuyo caso deberán aportar copia del título de familia numerosa.
- La oposición expresa a la verificación por parte de la Administración podrá realizarse por los interesados en los correspondientes formularios de tramitación del procedimiento.
- c) Los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género. La condición de víctima de violencia de género se acreditará mediante la aportación de la documentación prevista en el artículo 7 de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León.
- d) Las víctimas de terrorismo o hijos e hijas de víctimas de terrorismo. La verificación de la condición se realizará de forma directa o por medios electrónicos, salvo oposición expresa de los solicitantes en cuyo caso deberán aportar la

documentación prevista en el artículo 3 de la Ley 4/2017, de 26 de septiembre, de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León.

La oposición expresa a la verificación por parte de la Administración podrá realizarse por los interesados en los correspondientes formularios de tramitación del procedimiento.

- e) Los hijos e hijas de familias monoparentales, siempre que la renta per cápita mensual de la unidad familiar no supere los 320 euros

A los efectos de este decreto se entiende por familia monoparental la unidad familiar con hijos menores, o mayores de edad en situación de dependencia, que se encuentren a cargo de un único responsable familiar a 31 de diciembre del año anterior al inicio del curso escolar.

Las familias monoparentales acreditarán su condición con carácter general mediante exhibición del libro de familia, resolución judicial que atribuya la guarda y custodia exclusiva del niño o niña, o resolución de reconocimiento de la condición de monoparentalidad según la normativa vigente, aportando copia de dicha documentación y excepcionalmente mediante certificación de la que se deduzca fehacientemente que éste convive de forma permanente y en exclusiva con sólo uno de ellos.

- f) Los menores a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Será igualmente aplicable la exención cuando ese grado de discapacidad se haya reconocido a alguno de sus progenitores, tutores legales, o hermanas o hermanos. La concurrencia de discapacidad se verificará de forma directa o por medios electrónicos cuando la discapacidad haya sido reconocida por la Comunidad de Castilla y León u otra comunidad autónoma, salvo oposición expresa por los solicitantes o en el supuesto de que haya sido reconocida por un órgano de la Administración general del Estado, en cuyo caso deberán aportar cualquiera de los documentos previstos en el artículo 2 del Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de persona con discapacidad

a los efectos del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

La oposición expresa a la verificación por parte de la Administración podrá realizarse por los interesados en los correspondientes formularios de tramitación del procedimiento.

2. Tendrán bonificación en el pago del precio público referido en el artículo 1 las personas que se encuentren en las siguientes circunstancias:

- a) Los menores pertenecientes a familias numerosas de categoría general tendrán una reducción del 50 por ciento del precio correspondiente para cada menor. La acreditación se realizará conforme a lo indicado en el apartado 1 letra b) de este artículo.
- b) Los menores pertenecientes a familias monoparentales, si la renta per cápita mensual de la unidad familiar es superior a los 320 euros, tendrán una reducción del 50 por ciento del precio correspondiente para cada menor. La acreditación se realizará conforme a lo indicado en el apartado 1 letra e) de este artículo.
- c) En el supuesto de que dos menores de la misma unidad familiar, no incluida en las letras anteriores, asistan al mismo centro, el primero de ellos abonará el importe según la tarifa correspondiente, el segundo tendrá una reducción del 25 por ciento del importe del precio público que le correspondiera abonar por nivel de renta. En el caso de que estos hermanos hubieran nacido de parto múltiple la reducción será de un 40 por ciento por cada uno. A estos efectos se considerarán nacidos de parto múltiple también aquellos nacidos dentro del mismo año que otro hermano o hermana. Se acreditarán dichas circunstancias mediante la presentación de certificado emitido por el centro y, en su caso, libro de familia, en cuanto al nacimiento de parto múltiple, aportando copia de dichos documentos.

3. En el supuesto de concurrencia de exenciones y bonificaciones en el abono de un precio público se aplicará la exención del pago. En el caso de concurrir varios supuestos de bonificación, se aplicará únicamente el supuesto más beneficioso económicamente.



4. Para la acreditación de las circunstancias recogidas en este artículo, además de los criterios indicados, podrán utilizarse aquellos que se prevean en la norma vigente en cada momento que regule el procedimiento de admisión en las escuelas infantiles de titularidad de la Comunidad de Castilla y León.»

Cuatro.- Se modifica el apartado 2 del artículo 6, quedando como sigue:

«2. A esta cuota se aplicarán los mismos criterios de exenciones, reducciones y sistema de pago previstos en los artículos 4, y 5. »

Cinco.- Se añade un artículo nuevo, el 6.bis, quedando como sigue:

**«Artículo. 6. bis. - Precios públicos del servicio del comedor escolar en el tercer curso.**

1. Se aprueba el precio público por la prestación del servicio complementario de comedor escolar en el tercer curso de educación infantil en las escuelas infantiles de titularidad de la Administración de la Comunidad de Castilla y León que se recoge en el Anexo de este decreto.

2. A esta cuota se aplicarán los mismos criterios de determinación de renta, exenciones, reducciones y sistema de pago previstos en los artículos 3, 4, y 5.»

Seis. Se añade un artículo nuevo, el 8, quedando como sigue:

**«Artículo. 8. – Falta de pago.**

1. La falta de pago del importe del precio público, podrá suponer la suspensión de la prestación del servicio.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1, la administración podrá exigir el pago de las cantidades pendientes por los servicios, pudiendo establecer sobre estas cantidades un recargo que se calculará aplicando a los importes adeudados el interés legal

del dinero establecido en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado.»

Siete. Se modifica la Disposición final quedando como sigue:

#### **«DISPOSICIONES FINALES**

**Primera.** – *Desarrollo normativo.*

Se autoriza a las personas titulares de las consejerías con competencias en materia de hacienda y de educación en el ámbito de sus respectivas competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo del presente decreto.»

**Segunda.** – *Entrada en vigor.*

El presente decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.»

Ocho. El anexo queda redactado del modo que figura en el anexo del presente decreto.

ANEXO

**Precios Públicos**

**Primer y segundo curso del primer ciclo de educación infantil (0 a 2 años):**

| Denominación |  | Importe  |
|--------------|--|----------|
| 31B.1        | Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: hasta 180 euros        | Exento   |
| 31B.2        | Tarifa mensual. Renta per cápita mensual : De 180,01 a 230 euros | 28,00 €  |
| 31B.3        | Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: De 230,01 a 270 euros  | 33,60 €  |
| 31B.4        | Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: De 270,01 a 320 euros  | 48,00 €  |
| 31B.5        | Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: De 320,01 a 360 euros  | 59,50 €  |
| 31B.6        | Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: De 360,01 a 400 euros  | 71,40 €  |
| 31B.7        | Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: De 400,01 a 500 euros  | 90,00 €  |
| 31.B.8       | Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: De 500,01 en adelante  | 108,00 € |

El importe del precio público establecido incluye el servicio de carácter educativo y el servicio complementario de comedor escolar.

**Servicio de comedor en el tercer curso del primer ciclo de educación infantil (2 a 3 años):**

| Denominación |   | Importe |
|--------------|---|---------|
| 31B.1        | Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: hasta 180 euros       | Exento  |
| 31B.2        | Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: De 180,01 a 230 euros | 9,45 €  |
| 31B.3        | Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: De 230,01 a 270 euros | 12,60 € |
| 31B.4        | Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: De 270,01 a 320 euros | 15,80 € |
| 31B.5        | Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: De 320,01 a 360 euros | 20,80 € |
| 31B.6        | Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: De 360,01 a 400 euros | 26,00 € |
| 31B.7        | Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: De 400,01 a 500 euros | 35,20 € |
| 31.B.8       | Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: De 500,01 en adelante | 44,00 € |